

te; y que en esta virtud, apareciendo la violacion de garantías que alegan, procede el recurso de amparo que han entablado. Con apoyo de la ley de 20 de Enero de 1869 se resuelve lo siguiente:

1º Es de revocarse y se revoca la sentencia que en 11 del actual, pronunció el juez de Distrito de Puebla, declarando: que la Justicia Federal no ampara á los ciudadanos Cristóbal Poblano, Cayetano Chaltel y Lucas Montiel.

2º La Justicia de la Union ampara y protege á esos ciudadanos, contra la órden del juez menor de Paz de San Gregorio las Caleras, por la cual se ocuparon los terrenos que se han referido, en la apertura de la calle prevenida por esa autoridad.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos, lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogaszon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Junio 28 de 1872.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO promovido ante el Juzgado de Distrito de Mérida por Pablo Solís, contra el C. Juez 1º de lo criminal de esa Capital Juan N. Buendía, que sin jurisdicción lo tiene preso y encausado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El movimiento revolucionario inicia-

do en la ciudad de Valladolid el 13 de Marzo último, y concluido el 31 del propio mes con la entrada á esta capital de la fuerza armada que lo apoyara, tuvo por objeto derrocar de sus puestos respectivos á los que aún permanecían en ellos con el carácter de autoridad de tal ó cual órden, sin embargo de que habían dejado ya de serlo para el Estado desde el 31 de Enero del presente año en que cumplieron los dos que debía durar su misión legítima atendido el art. 85 de la Constitución local sancionada el 25 de Abril de 1862, de que va adjunto á este expediente un ejemplar, y á cuyos preceptos se ajustaron tanto el Ejecutivo del Estado al expedir la convocatoria, como los ciudadanos al verificarse la elección de sus mandatarios. Reprobado por disolvente y criminal, como debía serlo justamente, ese medio de vindicar con las armas en las manos los ultrajes que se creen recibidos de las extralimitaciones del poder conferido, y anodado en presencia de las fuerzas federales enviadas por el Supremo Gobierno á sofocarlo, el movimiento de Valladolid hizo brotar ó despertó en los demás pueblos el deseo de ejercer de una manera pacífica y legal el inalienable derecho que tienen de descartarse de las autoridades cuya misión ha concluido, y de elegir otras que Constitucionalmente desempeñen sus sagradas obligaciones. A este fin se encaminan las razonadas y sumisas actas que desde la aldea mas miserable hasta la ciudad mas populosa, y desde la distancia mas próxima hasta la mas remota, han sido elevadas al actual Gefe del Ejecutivo del Estado, y publicadas en el periódico oficial de este mismo.

Tales documentos, á su vez, parece que han venido á formar ó robustecer la conciencia de los Ciudadanos Presidente y Ministro Fiscal del H. Tribunal superior de justicia local, según que, á pesar de ser partes interesadas en la

cuestion, han declarado que no tienen ya título legítimo para seguir desempeñando sus respectivos encargos, en virtud de no tener actualmente otro origen que el artículo transitorio de la Constitución reformada el 21 de Enero de 1870, *el cual no era representativo popular ni conforme á las estipulaciones del Pacto Federal*. Esta franca y honrada manifestación de las dos personas mas caracterizadas del primer Tribunal del Estado, dada á conocer al público por medio de "La Razon del pueblo" de que el infrascripto acompaña un ejemplar, no podría menos que causar honda sensación en nuestra sociedad, y venir á poner mas en claro todavía la absoluta falta de jurisdicción de los que siguen ejerciendo en ella las funciones de legítimos y verdaderos jueces. Por eso no es extraño que, bajo la influencia de los sentimientos excitados por esa solemne protesta y por aquellas tan multiplicadas actas, el C. Pablo Solís haya promovido el presente juicio de amparo contra el artículo transitorio de la referida Constitución del Estado sancionada en 21 de Enero de 1870, del cual deriva el C. Lic. Juan Buendía, según confiesa en su respectivo informe, la autoridad que ejerce en esta ciudad como juez del crimen, con cuyo carácter juzga y tiene preso al quejoso, quien fundas su ocurno en el artículo 1º, fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, por considerar violada en su persona la garantía individual consignada en el artículo 14 de la Carta fundamental de la República.

Y ciertamente, este principio constitutivo de nuestro modo de ser político, establece y sanciona la regla establecida de antiguo, en naciones menos avanzadas que la nuestra en la senda de la libertad, de que no se puede expedir ninguna ley retroactiva; pero contra este precepto constitucional ha sido estampado el artículo transitorio en la Constitución local reformada; porque sus dis-

posiciones, debiendo tener efecto para el porvenir, se ha querido que retrocedan al tiempo pasado, y comprendan y favorezcan á las autoridades que acababan de ser elegidas, ya con presencia de otra ley constitutiva que, en su artículo 85, ofrecía que los jueces de primera instancia solo durarian dos años en el ejercicio de su respectivo ministerio.

Tal parece que se esperaba únicamente ver de qué matiz político eran los agraciados por el sufragio popular, ó de qué cualidades personales, para variar la ley bajo cuya garantía se verificó la elección, alargando ó restringiendo el período que debía durar en su destino el elegido del pueblo, según que este fuese simpático ó adverso á la asamblea reformadora. ¿Qué dirían los jueces nombrados ó electos popularmente conforme al repetido art. 85 de la Constitución de 1862, si en vez de durar en su ministerio dos años como este prescribe, se expidiese al día siguiente de su elección una reforma en virtud de la que se limitase su duración á solo un año? ¿No es verdad que tendrían razon sobrada para reclamar contra este avance del poder, contra este atentado que les aminoraba su tiempo y hacia un tremendo agravio á la ley que les señalaba otro mayor? Pues de la misma manera, nada es mas justo que el ciudadano reclame contra esa violación que prolonga inconstitucionalmente el tiempo de duración de los jueces, y á la que ni siquiera puede darse el nombre de próroga de sus facultades, porque es improrogable lo que no existe, y que se ampara contra ella escudado del art. 14 del Pacto federal, que no permite dar á ley alguna efecto retroactivo.

Los principios generales de Jurisprudencia enseñan, que al juez que administra justicia fuera de su tiempo, ó de su lugar, impunemente se le desobedece, por la sencillísima razon de que el que está fuera de su lugar ó de su tiempo

no es juez sino un ciudadano particular como otro cualquiera.

M. Portalis dejó dicho en la exposición de los motivos del primer título de un Código civil de Francia, que "el oficio de las leyes es arreglar lo futuro: lo pasado no está ya en su dominio. Si hubiese un país en el mundo donde estuviese admitida la retroacción de las leyes, no habría en él ni aun sombra de seguridad. La ley natural no está limitada por los tiempos ni los lugares, porque es de todos los países y de todos los siglos. Pero las leyes positivas, que son obra de los hombres, no existen para nosotros sino cuando se promulgan, y no pueden tener efecto sino cuando existen. La libertad civil consiste en el derecho de hacer lo que la ley no prohíbe; y se mira como permitido todo lo que no está vedado. ¿Qué sería, pues, de la libertad civil, si pudiese temer el hombre que aun despues de haber obrado sin infringir las leyes quedaba expuesto al peligro de ser perseguido por sus acciones, ó *turbado en sus derechos en virtud de leyes posteriores?* Lo pasado no puede ser del dominio de las leyes nuevas que no lo regian. El poder legislativo es la omnipotencia humana. La ley establece, conserva, muda, modifica, perfecciona, destruye lo que es, y crea lo que todavía no es. Pero el poder de la ley no puede extenderse á cosas que ya no son, *y que por eso mismo están fuera de todo poder.* El hombre que no ocupa sino un punto en el tiempo y en el espacio, sería por cierto un ser bien desgraciado, si no pudiera tranquilizarse ni aun con respecto á su vida pasada. Lo pasado puede dejarnos sentimiento y pesar; pero pone término á toda incertidumbre. En el órden de la naturaleza solo es incierto el porvenir; y aun la pená de esta incertidumbre se alivia y templá por la esperanza que nunca deja de ser fiel compañera de nuestra debilidad. Empeorariamos mucho la triste condicion de la hu-

manidad si quisiéramos cambiar por el sistema de la legislación el de la naturaleza, y tratásemos de hacer revivir nuestros temores con respecto á un tiempo que ya no existe, sin poder restituírnos al mismo paso nuestras esperanzas. Lejos de nosotros la idea de esas leyes de dos caras que, teniendo un ojo fijo sobre lo pasado y otro sobre lo venidero, secarían la fuente de la confianza y llegarían á ser un principio eterno de injusticia, de trastorno y de desórden." El fiscal no ha podido excusarse de citar estas frases del mencionado publicista francés, porque para nadie pueden ser sospechosas y porque son aplicables al presente caso en que se trata de la retroactividad del artículo transitorio de la Constitución vijentel el Estado, contra el cual pide amparo el C. Pablo Solís como opuesto al 14 de la general de la República. Con fundamento de él, y de las razones expuestas, el fiscal concluye y pide: que vd. se sirva conceder el amparo que el C. Pablo Solís invoca, contra esa disposición local, y consiguientemente contra los actos reclamados del C. Juan N. Buendía que en virtud de ella, y á pesar de su notoria inconstitucionalidad, sigue desempeñando las funciones de Juez de 1ª instancia del crimen de esta ciudad, con cuyo carácter tiene preso y está encausando al quejoso. Protesta el infrascripto que al emitir su pedimento en estos términos, se ha sustraído de toda injerencia en la cuestion política que lastimosamente se ajita hoy en el Estado; limitándose á analizar la ley que la ocasiona, y eso por decidir si cabe contra ella el recurso que en tales casos permite interponer la fracción 1ª, artículo 1º de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869.—Su ministerio público lo circunscribe á este deber, y de los límites que le están trazados no cree haber salido el fiscal con lo expuesto hasta aquí.

Mérida, Junio 15 de 1872.—*P. Hijuelos.*

Es copia que certifico. Mérida, Junio 15 de 1872.—*Prudencio Hijuelos.*

SENTENCIA del C. Juez de Distrito.

Juzgado de Distrito del Estado de Yucatan. Mérida, Junio diez y ocho de mil ochocientos setenta y dos.—Visto este juicio de amparo solicitado por Pablo Solis contra el C. juez 1º de lo criminal de esta Capital, Juan N. Buendia, que sin jurisdicción lo tiene preso y encausado, conforme al artículo transitorio de la Constitución reformada de 1870, y con prohibición de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Visto el informe de la autoridad responsable; el pedimento Fiscal y la citación para sentenciar. Considerando 1º: Que en 20 de Setiembre de 1869, el Ejecutivo expidió la convocatoria para elecciones de los Supremos Poderes del Estado, la que en lo conducente dice: "Que en uso de la facultad que me concede la fracción 12 del artículo 58 de la Constitución del Estado, (la de 21 de Abril de 1872) he tenido á bien decretar lo siguiente:

Artículo 1º se convoca á los ciudadanos del Estado de Yucatan para las elecciones de los Poderes públicos del mismo.

Artículo 3º de conformidad con el artículo 88 de la citada ley, el primer domingo del mes de Noviembre próximo, se verificarán las elecciones de Diputados propietarios y suplentes al Congreso del Estado, de Gobernador y vice Gobernador, de cuatro Magistrados y un Fiscal propietarios é igual número de supernumerarios para el Tribunal Superior de Justicia, y de Escrutadores de Distrito. Al día siguiente se hará la elección de los demás funcionarios públicos y corporaciones." 2º que el día fijado que fué el 8 de Noviembre, tuvieron lugar las elecciones de jueces de primera instancia, quienes debían durar en ese encargo dos años, según el artículo 85 de

la Constitución del Estado. 3º Que por este mismo artículo de dicha Constitución reformada en 21 de Enero de 1870, la duración de dos años de los jueces de primera instancia en su encargo, se convirtió en cuatro años. 4º que estos cuatro años, se mandaron aplicar al periodo Constitucional que, por el artículo transitorio de la reformada, debía empezar el 1º de Febrero de 1870. 5º Que habiéndose verificado las elecciones con sujeción á la Constitución de 1862, no podía variarse la voluntad popular expresada en ellas, mudando la duración de los empleados electos, sin faltar á sus preceptos y al artículo 14 del Pacto fundamental de la República, porque semejante paso fué dar una ley para mudar un hecho consumado antes, de conformidad con el tenor constitucional, cuyo hecho no es otro que el de las elecciones celebradas en el mes de Noviembre de 1869. 6º que esta retroactividad está condenada por los principios de legislación universal, y se hubiera evitado con solo disponer que las reformadas empezaran á regir en el periodo siguiente que debía iniciar en 1872, porque entonces las elecciones del presente año serian posteriores á ellas y conformes en un todo á la Constitución local y á la general. 7º Que aun cuando se quiera tomar como base del periodo Constitucional la fecha de 1º de Febrero que se señala para su inicio en el referido artículo transitorio, claro está que en la propia fecha de este año, cesaron en su encargo Constitucional las autoridades electas en Noviembre de 1869, y entre ellas los jueces de primera instancia. 8º Que por estos fundamentos el C. Buendia ha dejado de ser juez Constitucional con arreglo á la Constitución de 1862 desde el 1º de Febrero último, siendo anticonstitucional el artículo transitorio de la Constitución reformada en 1870 que le prorogaba por dos años mas la duración de su encargo, contra el cual procede el amparo y por con-

siguiente contra los actos de dicho ciudadano. 9º Que entre el cumplimiento del artículo transitorio referido y el del 14 de la Constitución Federal, se debe obsequiar este último y están obligados á ello todos los jueces de la República, por el artículo 126 que dice: "Los jueces de cada Estado se arreglarán á dicha Constitución, leyes y tratados á pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones y leyes de los Estados," precepto que impone á todos los jueces la obligación indeclinable de examinar cada ley para aplicarla si nó es contraria á algun precepto de la Carta referida. 10º Que por esta razón y para no faltar á los artículos 836 y 837 del Código penal del Estado, el Presidente y Fiscal del H. Tribunal Superior de Justicia local han dudado de su jurisdicción y se han separado de sus empleos, porque creen que ha cesado el período Constitucional el 1º de Febrero último, como se comprueba con el periódico oficial acumulado en autos. 11º Que careciendo de jurisdicción el C. Buendia, ha infringido tambien en la persona del postulante el artículo 16 de la Constitución general. Por lo expuesto y de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitución Federal y el pedimento Fiscal, la autoridad decreta: La justicia de la Union ampara y protege á Pablo Solis contra actos del C. juez 1º de lo criminal, quien con arreglo al artículo transitorio de la Constitución del Estado de 1870 lo tiene encausado y preso infringiendo los artículos 14 y 16 del Pacto Federal. 2º Sáquese testimonio de este fallo para publicar y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos para su revision, de conformidad con los artículos 13 y 27 de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869. Notifíquese.—*I. Manzanilla.* Ante mí: *José Anacleto Castillo.*

Es copia que certifico para su publicación en el "Semanario Judicial" Mé-

Tomo III.—Parte II.

rida, de Yucatan, Junio diez y nueve de mil ochocientos setenta y dos.—*José Anacleto Castillo.*

EJECUTORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Junio 28 de 1872.—Visto el juicio de amparo promovido por Pablo Solis el día cuatro de Junio corriente, contra los actos de jurisdicción ejercidos en el proceso que se le formó por el C. Juan N. Buendia, como juez primero de lo criminal en la ciudad de Mérida, Estado de Yucatan; vista la sentencia del juez de Distrito de aquel Estado, de diez y ocho de este mes, que concedió el amparo; y considerando:

1º Que en Noviembre de mil ochocientos sesenta y nueve fué elegido popularmente el juez Buendia, para ejercer sus funciones durante dos años contados desde primero de Febrero de mil ochocientos setenta, conforme al artículo 85 de la Constitución vigente del Estado.

2º Que despues de hecha y declarada la eleccion popular del juez Buendia, reformó la Legislatura en veintinueve de Enero de mil ochocientos setenta, varios artículos de la Constitución del Estado, entre ellos el 85, estableciendo en el reformado que los jueces durasen cuatro años, y disponiendo en el artículo transitorio de la Constitución reformada, que las reformas rijesen en el período que iba á comenzar el primero de Febrero del mismo año.

3º Que el hecho de modificar por una ley posterior los efectos de una eleccion popular, hecha antes, extendiendo á un tiempo mayor la duración del mandato conferido por el pueblo para un tiempo menor en las elecciones de un Estado, es contrario al sistema representativo popular, garantido á los Estados por el artículo 109 de la Constitución Fe-

deral, é importa dar una ley retroactiva contra lo dispuesto en el art. 14 de la misma Constitucion.

4º Y que no teniendo ya el C. Buendia autoridad competente para procesar al que ha promovido este recurso de amparo, se infrinje con sus procedimientos el art. 16 de la Constitucion Federal.

Por lo expuesto, y conforme á los artículos 101 y 102 de la Constitucion, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia del juez de Distrito de Yucatan en los términos siguientes:

La justicia de la Union ampara y protege á Pablo Solis, contra los actos de jurisdiccion ejercidos en el proceso que se le está formando por el C. Juan N. Buendia, como juez primero de lo criminal en Mérida, Estado de Yucatan, con cuyos actos se infrijen, en la persona del quejoso, las garantías consignadas en los artículos 14 y 16 de la Constitucion Federal.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de Distrito, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron con excepcion de un solo voto, los Sres. Presidente y Magistrados que forman el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos, y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. María del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Gumán.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico.—México, Julio 2 de 1872.—*Luis María Aguilar*, secretario.

COMPETENCIA promovida por el Juzgado 3º de lo criminal de Guadalajara á la Comandancia militar de la misma ciudad, para conocer de la causa contra D. Juan Magallanes, alcaide de la penitenciaría del Estado de Jalisco, por la fuga de varios reos.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El Fiscal dice: que el Juzgado 3º de lo Criminal de Guadalajara, inició competencia á la autoridad militar de esa Plaza, para conocer de la causa instruida contra el alcaide de la cárcel de esa ciudad D. Juan Magallanes por la fuga de los reos políticos Valentin y Servando Gómez.

La autoridad militar pretende conocer del proceso instruido contra el referido Magallanes, en atencion á que segun dice su informe, en los momentos en que consumaron su fuga los Gómez, el alcaide Magallanes desempeñaba una comision militar, y por lo mismo estaba sujeto al fuero de guerra. El suscrito que no acepta esta opinion, cree de su deber pedir en favor de la jurisdiccion comun.

Amenazada la plaza de Guadalajara por las fuerzas de García de la Cadena, el alcaide Magallanes, en union de otros presos pidieron se les armara, para conservar el orden. Esta comision, puramente de policia y buen gobierno, no puede decirse que está comprendida en ninguno de los artículos de la ley de 15 de Setiembre de 1857, reglamentaria del fuero de guerra. Ley que por su misma naturaleza y atendiendo al espíritu de nuestras instituciones debe ser interpretada en un sentido extricto.

La falta por que se ha procesado á D. Juan Magallanes es exclusivamente relativa á su empleo de alcaide, versa sobre una omision, ó culpabilidad criminal en la fuga de unos reos puestos bajo su custodia en el edificio que él cuidaba como guardador de presos; y por lo mismo, de esas faltas, de esas